

Desmontando el mito del campesinado libre **Reseña crítica de *La cuestión agraria de Karl Kautsky***

Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo
Área de Economía, Política y Sociedad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible (FEEDS)
Universidad de La Salle

La cuestión agraria bajo el capitalismo no es un problema aislado ni una anomalía dentro de la evolución del sistema. No se trata de un sector que, por alguna extraña razón, quedó rezagado en la historia mientras la industria avanzaba con paso firme. Al contrario, es el testimonio de cómo la lógica del capital reconfigura hasta la última fibra de la producción humana, incluso aquellas aparentemente ancladas en la tradición y la tierra. La agricultura no es una esfera separada del resto de la economía; es un territorio donde la lucha de clases se desarrolla con particular crudeza, con procesos de expropiación, concentración del capital y proletarización que, aunque más lentos y silenciosos, no son menos devastadores.

El mito del pequeño campesino autosuficiente es uno de los espejismos más persistentes. La imagen del trabajador independiente que labra su tierra, dueño de su destino, resulta conmovedora pero profundamente falsa. La estructura del capital lo asfixia desde todos los ángulos: las grandes explotaciones acaparan

la maquinaria, la tecnología y los mejores suelos, mientras que los pequeños propietarios se endeudan, quedan atrapados en redes de intermediarios y se ven obligados a vender sus cosechas a precios dictados por los monopolios. Es un proceso de proletarización encubierta. No hay cadenas visibles, pero la sujeción es igual de brutal. Los mismos campesinos que creen poseer su tierra descubren que en realidad son rehenes de la banca, de las multinacionales de insumos agrícolas, de los grandes distribuidores que controlan el acceso al mercado.

Aquí se desmorona otro mito: el de la coexistencia armoniosa entre la industria y la agricultura. No hay simbiosis, hay dominación. La industria impone sus reglas y la agricultura obedece. La producción agrícola se moderniza, sí, pero no en función de las necesidades del campesinado, sino en beneficio del capital. La mecanización y el uso de fertilizantes químicos no se despliegan equitativamente; los pequeños productores quedan excluidos del progreso técnico o acceden a él al precio de su independencia;

así, la revolución tecnológica no es neutral, es un arma de guerra en la concentración del capital.

Este desajuste tiene efectos demoledores en la estructura agraria en donde en la pequeña producción, en apariencia resistente, sobrevive gracias a una explotación intensiva de la fuerza de trabajo campesina, que acepta condiciones inhumanas porque no tiene alternativa. Mientras el obrero industrial vende su tiempo y su esfuerzo por un salario, el campesino endeudado se exprime a sí mismo, trabaja jornadas interminables sin garantizarse siquiera el mínimo necesario para una vida digna. Es un mecanismo perverso en el que el sistema no necesita expulsar de inmediato al pequeño propietario, pues sólo basta con someterlo a una presión económica constante hasta que colapse por sí solo.

La crisis agraria no es una anomalía, es una consecuencia inevitable de la lógica capitalista, pues la contradicción fundamental es que el capital necesita expandir constantemente la producción, pero la tierra no se multiplica. Las crisis de sobreproducción y la caída de los precios agrícolas son recurrentes precisamente porque el mercado opera con una irracionalidad estructural, dado que no se produce en función de la necesidad social, sino de la rentabilidad. Mientras haya tierras más productivas en otros países,

mientras el comercio global permita inundar los mercados con productos a menor costo, los agricultores locales estarán condenados a una competencia suicida. La agricultura capitalista no solo enfrenta limitaciones económicas, sino también físicas y biológicas. No puede acelerar indefinidamente los ciclos naturales sin generar desajustes ecológicos y sociales de proporciones catastróficas.

Pero si la pequeña producción no es viable y la gran propiedad solo profundiza la explotación, ¿cuál es la alternativa? La solución no pasa por romantizar al campesino ni por reformismos tibios que apenas prolongan la agonía del sistema. Se necesita un cambio estructural: la socialización de la tierra y la planificación racional de la producción agrícola. No se trata de una quimera utópica, sino de la única manera de evitar la depredación sistemática que impone el capital.

La agricultura no puede seguir funcionando como un negocio más, sujeto a las reglas de la competencia y la maximización de beneficios. Debe ser organizada colectivamente, garantizando que el desarrollo tecnológico se ponga al servicio de las necesidades humanas y no de la acumulación de riqueza privada. Lo que se desprende de este análisis es que la cuestión agraria no es un problema marginal, ni exclusivo del campo. Es una manifestación del

conflicto esencial del capitalismo: la contradicción entre la producción para la ganancia y la producción para la vida. No es posible solucionar la crisis agraria dentro del marco del mercado, porque el mercado es precisamente el problema. Mientras el capital dicte las reglas, la tierra seguirá concentrándose en pocas manos, los campesinos serán expulsados o empobrecidos, y la producción agrícola oscilará entre la sobreexplotación y el desperdicio.

La única vía posible es transformar radicalmente la forma en que se organiza el trabajo agrícola, arrebatándole a la lógica del capital su dominio sobre la alimentación y la supervivencia humana.

Este no es un llamado a la nostalgia ni a un retorno imposible al pasado, sino a una reorganización del futuro. La historia de la agricultura bajo el capitalismo es la historia de una guerra silenciosa, donde la tierra, el trabajo y la vida misma son sacrificados en nombre de la rentabilidad. No basta con paliar los síntomas, hay que erradicar la enfermedad y esto solo será posible cuando la producción agrícola deje de ser un negocio y se convierta, por fin, en un derecho colectivo.

En La cuestión agraria, Karl Kautsky (1980) destruye el espejismo de la pequeña propiedad como refugio del campesinado en el capitalismo. Lejos de ser un espacio de

autonomía, la tenencia reducida de la tierra se convierte en una trampa mortal que expone a los campesinos a la lógica despiadada del mercado. Fragmentados, aislados y atados a la producción en condiciones de desventaja estructural, se transforman en proletarios sin fábrica, obligados a sostener con sus propias manos una producción que cada vez les pertenece menos. En Colombia, este proceso se observa con particular crudeza en donde la tierra sigue siendo el escenario de una desigualdad histórica que no solo expulsa al campesinado, sino que lo margina en su propia existencia, perpetuando un modelo de exclusión que refuerza el dominio de una minoría sobre vastas extensiones productivas.

El discurso internacional sobre los derechos campesinos, plasmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (ONU, 2018), proclama el derecho inalienable del campesinado a la tierra, la vida digna y la autodeterminación. Sin embargo, estas declaraciones se desmoronan cuando se enfrentan a la realidad tangible: según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (2023), el Índice de Gini de la propiedad rural en Colombia es un alarmante 0.89 (p. 120), prueba irrefutable de un sistema diseñado para la concentración extrema. No hay azar ni dinámica espontánea en este fenómeno pues

es el resultado de un modelo que no busca integrar al campesinado, sino más bien disolverlo como sujeto económico. Las pequeñas parcelas, en lugar de garantizar estabilidad, solo certifican la inviabilidad de un modelo productivo asfixiado por la falta de acceso a crédito, tecnología y mercados, mientras las grandes explotaciones crecen bajo la protección de políticas estatales que disfrazan el despojo con un discurso tecnocrático de modernización y desarrollo rural.

El modo de vida campesino ha sido descrito como un entramado que vincula territorio, cultura y producción en una relación indisoluble (Sánchez Cárcamo, 2024). Pero este modelo, aunque históricamente resiliente, choca frontalmente con la lógica del capital, que reduce la agricultura a una ecuación de rentabilidad y maximización de beneficios. Kautsky previó que, aunque la agricultura presenta barreras naturales a su concentración total, el proceso de proletarianización campesina es irreversible dentro de la estructura capitalista. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2014) reconoce las deudas históricas en Colombia con los campesinos y propone estrategias para mejorar su acceso a la tierra y fortalecer su capacidad productiva, que, sin embargo, este mismo documento deja entrever el engaño

estructural: sin una reforma profunda de la propiedad de la tierra, cualquier política de desarrollo rural no será más que un paliativo que prepara al campesinado para su progresiva desaparición, en lugar de garantizar su supervivencia como actor económico y social relevante.

La situación del agro colombiano confirma con una crudeza implacable las advertencias de Kautsky. La concentración de la tierra no es una anomalía ni una herencia del pasado; es una política de larga data que opera con precisión quirúrgica para consolidar el poder de unos pocos mientras relega a la mayoría del campesinado a la subsistencia o al éxodo forzado. La modernización del campo no ha significado un acceso equitativo a la tierra, sino la sofisticación de un modelo de explotación que absorbe al campesino como fuerza de trabajo barata o lo relega a un limbo productivo donde su existencia se vuelve irrelevante. El IGAC y el DNP lo confirman con cifras contundentes: la estructura de la propiedad rural no se ha democratizado, sino que ha reforzado un patrón de concentración que reduce al campesinado a un actor marginal en su propio territorio.

Si la Declaración de Derechos de los Campesinos (ONU, 2018) aspira a tener algún impacto real y no ser un simple ejercicio de retórica humanitaria, debe atacar con contundencia la estructura de poder que

sostiene el régimen agrario vigente. Mientras la tierra continúe acaparada por una élite y las políticas públicas prioricen la rentabilidad del agroindustrial sobre la soberanía campesina, cualquier discurso sobre derechos será pura simulación. La única vía para garantizar una transformación genuina es una reforma agraria de profundidad histórica, que no solo redistribuya la tierra, sino que desmonte los mecanismos de acumulación que han perpetuado esta desigualdad estructural. Kautsky lo dejó claro: el capitalismo es incompatible con una agricultura campesina viable. La disyuntiva es ineludible: o se cambia el modelo, o el campesinado desaparecerá como actor autónomo, convertido en pieza descartable de una maquinaria que nunca estuvo diseñada para su bienestar.

Bibliografía

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Misión para la Transformación del Campo. Recuperado de <https://faolex.fao.org/docs/pdf/col146503.pdf>

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2023). Fragmentación y distribución de la propiedad rural en Colombia. Recuperado de https://www.igac.gov.co/sites/default/files/2024-04/FDPRC_Territorios_Dig.pdf

Kautsky, K. (1980). La cuestión agraria (3ª ed.). Siglo XXI Editores.

Naciones Unidas. (2018). Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (Resolución 73/165). Recuperado de <https://undocs.org/es/A/RES/73/165>

Sánchez Cárcamo, R. A. (2024). Modo de vida campesino y desarrollo rural. Universidad de La Salle. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/378476719_Modo_de_vida_campesino_y_desarrollo_rural